

El régimen de la crisis permanente. Un balance de nueve años de kirchnerismo

Diego Bruno

Universidad de Buenos Aires - Facultad de Filosofía y Letras

brudieg@gmail.com

Resumen

El presente artículo traza una polémica con el llamado "relato" construido por el oficialismo a la luz de un análisis de conjunto de los gobiernos kirchneristas. Tomando como punto de partida la situación política inmediatamente posterior a la rebelión popular de 2001, y llegando hasta acontecimientos recientes como el desastre ferroviario de Once o la expropiación parcial de Repsol YPF, el artículo realiza un repaso crítico de los principales hitos --políticos, económicos y sociales-- del régimen kirchnerista en estos nueve años de gobierno.

Cuando los acontecimientos toman un giro revolucionario y se rompe la continuidad jurídica, las clases 'cultas' que quieren llegar al poder se agarran de buena gana a los nombres y símbolos ligados con los recuerdos heroicos de las masas. Gustan de cubrir con el manto de la palabra la verdadera realidad de las cosas, sobre todo cuando esto responde a los intereses de las clases dominantes.

León Trotsky, *Historia de la revolución rusa*

El origen

Habían pasado ya seis meses de la histórica rebelión popular que derrocó al gobierno de Fernando de la Rúa en diciembre de 2001: sin embargo, ninguno de los reclamos que motorizaron el estallido social se encontraban aún satisfechos. Por el contrario, con más de treinta trabajadores asesinados por las fuerzas represivas en las jornadas del 19 y 20, la miseria se acentuaba aún más con las medidas devaluatorias y la inflación creciente. El 26 de junio de 2002, en el marco de un masivo plan de lucha piquetero de la Asamblea Nacional de Trabajadores, la represión estatal desatada en el Puente Pueyrredón se cobró las vidas de los jóvenes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Un día después, una movilización popular aún mayor copó las calles en repudio a la masacre, precipitando así el final del gobierno interino surgido hacía unos pocos meses.

Pese a que el mandato presidencial estaba previsto hasta diciembre de 2003 (fecha en que también hubiera terminado el gobierno de Fernando de la Rúa), el presidente Eduardo Duhalde decidió tras los hechos adelantar las elecciones para el 18 de abril y el traspaso de mando para el 25 de mayo. La gravedad de la crisis institucional y económica, sumada a un estado de insurgencia popular y lucha callejera creciente, hicieron incluso declinar a Duhalde la posibilidad de presentarse a dicha elección. De lo que se trataba ahora, para la burguesía representada en el gobierno, era de encontrar un nuevo candidato capaz de recomponer la gobernabilidad del régimen que estalló con la bancarrota capitalista y la rebelión popular. La tarea no era sencilla, ya que a la bancarrota económica prosiguió la bancarrota de los partidos del régimen (UCR y PJ), identificados y repudiados por la población como los principales responsables de la crisis más grave que había vivido Argentina en toda su historia. La crisis del régimen capitalista era percibida por la población como una crisis de representatividad: el grito de "Que se vayan todos" resumía de alguna manera esta caracterización política.

Ante la debacle del radicalismo y la disgregación del peronismo a nivel nacional, no cabían dudas para la burguesía —pero también para el FMI— de que cualquier tentativa de recomposición de su poder político no podía sino apoyarse en los sectores devaluacionistas del peronismo bonaerense, la estructura partidaria más poderosa que quedaba en el país, y que era dirigida por el presidente Duhalde. Fue entonces cuando, ante la imposibilidad de lograr un acuerdo primero con Reutemann y luego con De la Sota, Duhalde decidió dar su apoyo a la precandidatura de Néstor Kirchner, el más débil y menos popular de los candidatos de la interna peronista.

Siendo gobernador justicialista de la provincia de Santa Cruz desde 1991, Néstor

Kirchner se caracterizó por ser un fuerte impulsor de las políticas “neoliberales” del menemismo; entre ellas se destacó el apoyo a la privatización de YPF. Por esta operación la provincia recibió una suma de 535 millones de dólares en concepto de regalías hidrocarbúricas. Aconsejado por el entonces ministro de economía Domingo Cavallo, el gobernador santacruceño depositó una parte de las regalías en un banco de Suiza y con otra compró acciones de YPF. Mientras tanto, cientos de trabajadores de YPF eran despedidos y comenzaban a engrosar las filas de los desocupados: muchos de ellos serían luego los fundadores del masivo movimiento piquetero que se esparcía por todo el país. Hacia 1998 la crisis internacional —el derrumbe de los “tigres asiáticos” y de Rusia— afectó con una importante fuga de capitales a la Argentina, revelándose rápidamente la fragilidad de las políticas neoliberales y las dificultades económicas del gobierno. A partir de ese momento el gobernador de Santa Cruz tomó distancia del presidente Carlos Menem y dentro de las filas del PJ se alineó con Duhalde, gobernador de la provincia de Buenos Aires y ya por entonces principal opositor.

Para principios de 2003 el proceso electoral finalmente había logrado instalarse. La burguesía retomaba la iniciativa producto de una incipiente recuperación económica y una relativa disminución de la insurgencia callejera. Sin embargo, la normalidad institucional y la recomposición de los partidos del régimen estaban lejos de haberse logrado. Ante la imposibilidad de llevar adelante su interna, el partido gobernante fue a las elecciones con tres candidatos: Kirchner, Menem y Rodríguez Saá, como si perteneciesen a partidos distintos. Esta crisis del PJ aseguraba que ninguno de los candidatos pudiera triunfar en la primera vuelta. El apoyo del aparato duhaldista y el ahora gratuito discurso antinoventista permitieron a Kirchner (Frente para la Victoria – FPV) subir algunas posiciones en las encuestas. A pesar de esto obtuvo solo un 22 % de los votos emitidos, resultando superado por Menem (Alianza Frente por la Lealtad -UCeDé), que obtuvo el 24,3%. Tener la posibilidad de un ballottage contra el artífice de las políticas que terminaron en la debacle de 2001 era, no obstante, la elección soñada para cualquiera de los candidatos. El conjunto de las otras fuerzas burguesas, para no quedar pegadas al desprestigiado menemismo, llamarían a votar por su oponente cualquiera fuera este. Por esto mismo los sondeos previos al ballottage indicaban entre un 60 y 70% de intención de voto para el gobernador de Santa Cruz. El ballottage, sin embargo, nunca tuvo lugar: el 14 de mayo el expresidente Menem anunció su decisión de renunciar a su candidatura, lo que automáticamente convirtió a Kirchner en presidente electo. Con el proceso electoral terminado, la crisis de régimen, sin embargo, no estaba cerrada: Néstor Kirchner accedía a la presidencia con el nivel más bajo de votos jamás registrado en la historia argentina. Las posibilidades de restablecer la autoridad del Estado dependerían entonces de factores no estrictamente vinculados al normal funcionamiento de la institucionalidad burguesa.

Fragilidad política y rescate a la “burguesía nacional”

La extrema debilidad con que asumía el nuevo gobierno, encabezado ahora por un ignoto gobernador patagónico del Partido Justicialista, solo puede analizarse a partir del cuadro político planteado por el levantamiento popular de diciembre de 2001. El repudio popular a los partidos tradicionales había llevado, por un lado, a la virtual disolución de la UCR y, por otro, a la fragmentación del peronismo en distintas camarillas que

se disputaban para sí los espacios de poder. Esta situación impedía al nuevo gobierno gozar de un apoyo en bloque de la tradicional estructura pejetista a nivel nacional. Asimismo, lejos de tener una identidad propia, la nueva administración se sostenía a partir de la misma camarilla duhaldista que había tenido que anunciar recientemente su retirada. En efecto, Kirchner asumió la presidencia confirmando para su gobierno al ministro de economía de Duhalde, Roberto Lavagna, y a otros miembros del gabinete de su antecesor. Esta continuidad del régimen, sumado a su pasado menemista, hacía del nuevo presidente un nuevo-viejo representante de la política que había sido repudiada por la población en diciembre de 2001: lejos estaba de ser una expresión de los sectores populares que habían protagonizado dicha rebelión.¹

En el plano económico, el nuevo gobierno ratificaba el rumbo que habían impuesto Duhalde y la burguesía devaluacionista, con el aval del departamento de Estado norteamericano. Se reivindicó la intervención estatal en la economía, a través de la devaluación del peso, que tuvo como objetivo fundamental recrear las condiciones de rentabilidad del capital a partir de una desvalorización de los salarios y del gasto público. Esta inédita confiscación social que le permitía a la burguesía local recontractar la fuerza de trabajo a precios inferiores a los de la década del 90 y en condiciones laborales considerablemente más precarias, fue acompañada además por la licuación de sus deudas, gracias a la pesificación asimétrica. Asimismo, la declaración de default de la deuda pública posibilitó la entrega de enormes subsidios a los servicios de energía y transporte y a los bancos que en 2001 habían sido el canal por donde se fugaron los capitales que provocaron el default.

Este régimen de emergencia, montado por Duhalde y ratificado luego por Kirchner, era presentado ahora como un modelo “antineoliberal” y de defensa de la producción nacional (el “modelo productivo”). Sin embargo, esta tentativa de “regulación” estatal para revivir al capitalismo argentino solo fue viable a partir de un elemento externo, no vinculado a los golpes de timón de la burguesía local: un ascenso del ciclo económico mundial desde finales de 2002, que implicó un progresivo aumento del precio de las *commodities* que dominan la pauta de exportación del país; esto en el marco de la entrada vigorosa de China como demandante de estas materias primas a nivel mundial. Estas circunstancias externas, sumadas a la depreciación del costo salarial interno le permitieron recuperar rentabilidad a la tradicional burguesía agroexportadora, que se transformó en el pilar fundamental de la recomposición económica del régimen. El aumento de las exportaciones, particularmente las de soja, permitieron al gobierno, por medio de las retenciones impositivas, hacerse de divisas que posibilitaron por un lado una cierta recuperación de sus finanzas y por otro seguir compensando —mediante subsidios— a los sectores de la burguesía que no se habían visto beneficiados directamente por la devaluación. Esta política de subsidios a las empresas energéticas y de servicios constituyó, en los hechos, un subsidio a la burguesía industrial: al no habilitarse una suba generalizada de tarifas, ésta pudo sostenerse sobre salarios extraordinariamente bajos y así poner en funcionamiento una capacidad instalada que en el marco de la megadevaluación recuperaba su competitividad frente a los productos importados.

Esta reconstrucción de la “burguesía nacional”, basada en la precarización y miseria salarial y la confiscación de los sectores medios, no operaba en el vacío sino que tenía que imponerse, como señalamos antes, en el cuadro político planteado por el levantamiento popular de diciembre de 2001. La salida frontalmente represiva ensayada por

Duhalde le había costado su gobierno. Consciente de esto, y de su propia debilidad política, Néstor Kirchner se vio obligado a llevar adelante las más diversas maniobras y alianzas políticas para, por un lado, neutralizar y aislar al movimiento popular y, por otro, alinear detrás suyo a los gobernadores y los dispersas fracciones políticas de la burguesía. La cooptación a través de los programas de asistencia social y la adopción, en un plano discursivo, de causas históricamente vinculadas a la lucha popular democrática y antimperialista, le permitieron ganar la confianza de sectores vinculados al progresismo y al nacionalismo de izquierda que habían simpatizado y algunos sido parte de la rebelión de 2001. La recomposición económica de la caja del Estado iba a jugar un rol fundamental en esta cooptación e iba a ser decisiva para encolumnar detrás de sí a la repudiada “vieja política” de los partidos patronales.

La restauración “antineoliberal”

El objetivo que se propuso Néstor Kirchner fue reconstruir a la burguesía nacional y restablecer la autoridad de su Estado, es decir recomponer el régimen que se había desmoronado. La recomposición de la economía capitalista necesitaba ahora de las muletas de su Estado y el Estado a su vez debía recuperar la iniciativa política para restaurarse como autoridad absoluta.

Un primer paso en este sentido fue la renovación de la Corte Suprema, cuyo objetivo primordial era el de terminar de convalidar la pesificación asimétrica que había confiscado los depósitos de pequeños y medianos ahorristas. En este mismo acto se convalidaba también la licuación de las deudas de los grandes capitales afectados o no por la bancarrota. Asimismo la banca era compensada con la emisión de nueva deuda pública, sin ser investigada por la nueva Corte por su responsabilidad en la fuga de capitales que condujeron al default. De esta manera se buscaba devolver al sistema financiero la “seguridad jurídica” perdida con la ruptura de los contratos pactados en moneda convertible. Todo este operativo jurídico de rescate al gran capital, sin embargo, era presentado a la población como una cruzada republicana contra la Corte del “antiguo régimen” menemista, popularmente señalada como la Corte de la “mayoría automática” y fuertemente cuestionada por carecer de independencia respecto del Poder Ejecutivo y por su carácter ideológicamente conservador, afín a los intereses del “neoliberalismo”. La nueva Corte, con un perfil ideológico “progresista”, aparentemente en las antípodas de la anterior, debutaba sin embargo con un fallo típicamente conservador que legitimaba el saqueo a los pequeños y medianos ahorristas, revelando así desde su origen como ilusoria la pretensión de una justicia independiente de los intereses capitalistas del Estado y de su nuevo gobierno ahora formalmente “antineoliberal”.

La otra cuestión de Estado, quizás la principal, para recomponer el régimen, era la salida del default, es decir reprogramar los vencimientos para volver a pagar la deuda externa con el objetivo futuro de recuperar el acceso al crédito internacional y reiniciar así un nuevo ciclo de endeudamiento. Los superávits gemelos, tanto el fiscal como el de la balanza comercial, eran la garantía de pago de lo que ahora el gobierno llamaba política de “desendeudamiento”. Este intento de resignificar el pago de la deuda externa no era un simple juego de palabras sino que tenía todo un trasfondo político: la fragilidad del gobierno para encarar una acción que no gozaba de la simpatía popular, más en un

contexto de crisis donde las necesidades básicas de los sectores populares seguían insatisfechas. El pago de la deuda externa por parte de los distintos gobiernos nacionales había condenado a la nación a ser una semicolonía del capital financiero de los países centrales, era la causa principal del último quebranto nacional y además estaba hartamente comprobado en los estrados judiciales su carácter usurario y fraudulento. Gran parte de la población percibía esto luego de la crisis y el problema para el gobierno consistía en presentar esta acción, típicamente neoliberal y de sometimiento al capital financiero internacional, como su contrario, como un acto acorde al “nuevo modelo” antineoliberal, también llamado “nacional y popular”.

El principal argumento del gobierno para presentar el pago como un acto de soberanía e independencia nacional era que éste se realizaría con una quita. Fue así que para mediados de 2004 anunció pomposamente que la base de negociación para reestructurar los pagos de la deuda sería alrededor del 60% de su valor original. Sin embargo, para entonces el valor de mercado de los bonos defaulteados en 2001 apenas llegaba al 20%. De esta manera, el canje de deuda se transformaba en un fabuloso negocio para los especuladores que la adquirieron a precio vil luego del default. De todas formas, el inmenso negociado no terminaba ahí, ya que a cambio de los títulos en mora el gobierno argentino ofreció en 2005 tres nuevos bonos (el Bono Par, el Cuasi Par y el Descuento): una “nueva deuda”, parte emitida en pesos con la excusa de hacerla “nacional”, que se indexaba con el crecimiento económico y un índice próximo a la inflación interna. La quita era en realidad un reendeudamiento que se prolongaba en el tiempo, es decir, una nueva hipoteca usuraria que condicionaría el futuro del país. A esto hay que sumarle el pago en 2005 del total de la deuda contraída con el FMI, sin ninguna quita, a pesar de que este organismo era señalado por el mismo gobierno “nacional y popular” como uno de los principales responsables de llevar al país a la peor crisis social de toda su historia.

Sobre la base de los “superávits gemelos”, en el período 2003-2007 el “modelo antineoliberal” terminó girando en concepto de obligaciones externas una suma superior a los 50 mil millones de dólares. A fines de 2009 la “política del desendeudamiento” había llevado la deuda pública a una suma de 145 mil millones de dólares, es decir igualaba aquella que acumularon los “neoliberales” De la Rúa y Cavallo antes de diciembre de 2001. A pesar de que algunos acreedores no aceptaron el canje en los términos del gobierno (solo un 24%), esta gigantesca operación de rescate a la banca y a los organismos multilaterales de crédito permitiría al gobierno del FPV congraciarse con gran parte del establishment: el apoyo transitorio de las distintas fracciones de la burguesía lo llevó a ganar las elecciones legislativas de 2005. Sin embargo, esta restauración de las bases capitalistas del régimen no tenía su correlato en un cambio cualitativo de las condiciones de existencia de los sectores populares. Una manifestación de esto es que el FPV sólo logró imponerse como primera minoría con el 30% de los votos emitidos, manteniéndose, aunque en menor grado, la dispersión del voto que había caracterizado a las elecciones de 2003. Como toda recuperación capitalista, ésta se había forjado sobre el esfuerzo de la población trabajadora y a expensas del gasto social. Por lo tanto el revulsivo social se mantenía latente y, agravado ahora por la inflación, se trasladaba también al interior de los lugares de trabajo.

Cooptación política y “derechos humanos”

Haber sido apadrinado por el responsable político de la masacre de Puente Pueyrredón era una carga pesada de llevar para un gobierno que necesitaba hacerse de apoyo popular y configurar a la vez un aparato político propio que le permitiera desplazar a la camarilla duhaldista, que a través de su red bonaerense de punteros intentaba mantenerse como un poder en las sombras. La disputa por ese aparato de punteros e intendentes del Gran Buenos Aires, indispensable para ganar cualquier elección, iba a llevar a Néstor Kirchner a un enfrentamiento con su mentor. La posibilidad de que esta red punteril se pasase de bando estaba determinada por la capacidad del gobierno de bajar recursos económicos y prebendas a las intendencias. El resultado de esta cooptación económica se reflejó en la victoria electoral del FPV sobre el duhaldismo en las elecciones legislativas de 2005. No obstante, con el telón de fondo de la rebelión popular que implicaba un giro a la izquierda del electorado, la “construcción de poder” del gobierno no podía limitarse al armado punteril del tradicional PJ bonaerense. Fue el momento de ensayar la llamada “transversalidad” para avanzar en la cooptación de sectores sociales, políticos, intelectuales y sindicales (MTA-CTA) que, como señalamos antes, se habían caracterizado en la última etapa por su oposición a las políticas “neoliberales” de los 90 y el repudio a los partidos tradicionales del régimen (PJ-UCR).

La construcción del relato “nacional y popular”, vinculado a la defensa de la producción nacional y a la intervención del Estado en la economía, sirvió para acercar en un plano ideológico a estos movimientos sociales y políticos vinculados al nacionalismo y a la centroizquierda. La demagogia vinculada a históricas reivindicaciones democráticas fue excusa para cooptar a reconocidas organizaciones de derechos humanos y a un sector de la intelectualidad progresista y hasta autoproclamada de izquierda. De esta manera el gobierno buscaba presentarse a sí mismo como una fuerza de centroizquierda, de defensa de lo nacional y el progreso, frente a las fuerzas de centroderecha que encarnaban la “restauración conservadora” del neoliberalismo. Sin embargo, “no se juzga a los hombres por lo que ellos dicen de si mismo sino por lo que hacen”, y lo mismo vale para los gobiernos. El gobierno que acordaba con el capital financiero internacional y los “barones” del conurbano y tenía por objetivo “reconstruir a la burguesía nacional” que había provocado el derrumbe de diciembre de 2001, no podía desarrollar consecuentemente ninguna tentativa de autonomía política o económica del país ni defender reivindicaciones democráticas que cuestionasen de conjunto el monopolio estatal de la fuerza de esa misma burguesía.

La llamada “política de derechos humanos”, que habría comenzado con el acto simbólico que descolgaba el cuadro de Videla en la ESMA, en realidad, nunca fue tal, ya que la derogación de las leyes de impunidad que permitía volver a juzgar a los genocidas solo estuvo en la agenda del gobierno a partir de los sucesivos pedidos de extradición de estos por parte de la justicia española. Es decir, una maniobra para impedir la extradición masiva de militares con la excusa de ser juzgados en el país. Así se buscaba evitar un enfrentamiento directo con las FF.AA. en una situación de extrema debilidad política. Las condiciones de la justicia argentina, con innumerables lazos con la FF.AA. —la mayoría de sus más influyentes funcionarios fueron nombrados durante la última dictadura militar— aseguraban la prolongación en el tiempo de los procesos y los juzgamientos a los genocidas. Algunos incluso llegarían al final de sus días sin haber sido juzgados. Salvo algunas excepciones vinculadas a los casos más resonantes, los juicios

avanzaron a cuentagotas y con el agravante de la intimidación y hasta el secuestro y desaparición de los testigos (Julio López). De esta manera quedaba demostrado que el aparato represivo heredado de la última dictadura militar seguía intacto y operando al interior de las actuales “fuerzas de seguridad”. Hay que destacar que el kirchnerismo nunca tocó los archivos de la Side que se utilizan para el espionaje interior y que se demoró ocho años en abrir los archivos de la inteligencia militar, el tiempo suficiente para su vaciamiento o adulteración. Por otro lado, prosiguieron los casos de gatillo fácil y torturas en las comisarías de la “maldita policía” (desaparición de Luciano Arruga en 2009, entre otros), revelando una continuidad, en materia de criminalidad y abuso policial, respecto de los gobiernos democráticos anteriores. La idea difundida de “no reprimir la protesta social”, utilizada para diferenciarse de los anteriores gobiernos de la derecha ideológica (Duhalde y De la Rúa), rápidamente se reveló falaz, ya que en aquellos casos en que no intervino directamente la fuerza pública lo hicieron grupos de choque paraestatales vinculados a la tradicional burocracia sindical. Esta alianza con las burocracias de los sindicatos fue fundamental para la reconstrucción del régimen, ya que operaba como dique de contención frente las crecientes luchas y el activismo que se desarrollaba en los lugares de trabajo producto de una recomposición económica que buscaba imponerse a través de la precarización laboral y devaluación de los salarios. Las constantes amenazas y la violencia física contra los sectores antiburocráticos tuvieron su máxima expresión el 20 de octubre de 2010 con el asesinato, por parte de una patota de la Unión Ferroviaria, del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra.

Las organizaciones de derechos humanos y los movimientos sociales o piqueteros, que finalmente se integraron al Estado y al apoyo gubernamental, lo hicieron entonces en base a los repudiados métodos de la “vieja política”: la regimentación a través de las prebendas económicas y la organización punteril. Esta desnaturalización de organizaciones y sectores progresistas que en el pasado reciente habían forjado una identidad en base a la denuncia y la lucha contra los atropellos del estado capitalista se vio brutalmente reflejada en el escándalo de corrupción que involucró a la Asociación Madres de Plaza de Mayo por el desvío de fondos públicos que estaban destinados a la construcción de viviendas sociales. El kirchnerismo en esta etapa limitó el apoyo a su armado gubernamental a la cooptación de dirigentes de estas organizaciones, en su mayoría de orientación nacionalista o reformista y en menor medida vinculadas a la izquierda (PC), las cuales creían ver en su integración estatal un contrapeso frente a los sectores políticos tradicionales que eran parte del gobierno. En realidad no eran más que un complemento, una cubierta, funcional a los intereses restauradores de la burguesía. Por esto mismo el apoyo de estas organizaciones nunca constituyó una referencia popular: las bases profundamente capitalistas de la transición impedían una transformación en términos cualitativos de las condiciones de existencia y de la vida democrática de las grandes masas.

Sucesión marital y crisis del “modelo productivo”

La elección de Cristina Fernández de Kirchner para suceder a su esposo en la elección presidencial de 2007 debe entenderse como una manifestación de la precariedad política y económica en que aún se encontraba la transición inaugurada en 2003. Según los voceros oficialistas, el relevo presidencial, en una señal de fortaleza, no hacía más que

preparar el retorno de Néstor Kirchner en las elecciones de 2011. Sin embargo lo que precipitó el relevo fue justamente lo contrario, es decir, el agotamiento del modelo que había llevado a una recomposición económica de la burguesía nacional. Esto se manifestaba en la creciente inflación, el colapso energético, la semiparalización industrial e incluso agropecuaria, y la caída internacional de los títulos públicos. Las derrotas electorales del gobierno en Tierra del Fuego y la ciudad de Buenos Aires fueron la expresión política de esta crisis del modelo “antineoliberal”, que se hizo más evidente a partir de la segunda mitad de 2007 con el estallido de la crisis internacional.

En este cuadro la candidatura de Cristina Kirchner, si bien garantizaba la continuidad de la camarilla kirchnerista, era presentada como la expresión de un viraje político que se imponía por las circunstancias. Con su perfil más pragmático y flexible, la burguesía confiaba en que asumiría los reclamos del gran capital en materia de liberación de tarifas y de precios, la satisfacción integral de los acreedores de la deuda y —de conjunto— un alineamiento incondicional con el imperialismo. En octubre de 2007 la candidata del kirchnerismo ganó las elecciones en alianza con una parte del repudiado partido radical (Cobos), acuerdo que sumaba credibilidad a su compromiso con la clase capitalista, pero que sin embargo no terminaba de convencer a la mayoría del electorado. El nuevo gobierno asumió con el 45% de los votos positivos y solo el 34% del padrón electoral.

A pesar de los superávits históricos logrados por el aumento de las exportaciones de granos y la devaluación de la moneda durante los cuatro años previos, el nuevo gobierno kirchnerista se enfrentó a una nueva crisis de deuda pública. Durante este período el “modelo productivo” había dilapidado más de 50 mil millones de dólares en pagos de la deuda y en evitar que el ingreso de divisas tirara abajo el precio del dólar. Contradictoriamente, los dólares que ingresaban por retenciones ahora se iban para mantener el peso devaluado y así sostener las exportaciones... y el modelo de las retenciones. Con los crecientes pagos de la deuda, que durante el año 2007 habían implicado una suba de 15 mil millones de dólares solamente por la indexación de la contraída en pesos, la necesidad del gobierno de hacerse de divisas aumentó y las contradicciones de esta calesita no pudieron sino estallar. Esto llevó no sólo a una nueva crisis de carácter económico sino a una de carácter político, derivada del enfrentamiento con la burguesía agroexportadora a partir de la decisión del gobierno —a través de la resolución 125/08 del Ministerio de Economía— de subir del 35 al 44 por ciento las retenciones a la exportación de soja y de establecer aumentos móviles según fuera evolucionando el precio internacional. Paradójicamente, para salvar al “modelo”, el gobierno iba a una crisis política con el sector del capital que, junto al financiero, más se había enriquecido durante el kirchnerismo, y que por lo tanto había aportado gran parte de los votos, principalmente el de los sectores medios del interior que habían posibilitado su victoria en las elecciones presidenciales.

Durante el desarrollo del conflicto, el gobierno de CFK, procuró presentarlo como un enfrentamiento entre la antinacional oligarquía terrateniente, tradicionalmente vinculada a los intereses capitalistas foráneos, y los intereses nacionales y populares que representaría el gobierno y su “modelo productivo”. Si bien esta envoltura ideológica le valió al gobierno el apoyo de un sector de la pequeña burguesía ilustrada (Carta Abierta), la apelación a movilizar detrás de sí a los sectores populares se limitó a la capacidad de convocatoria del aparato burocrático de las centrales sindicales oficialistas (CGT y un sector de la CTA) y las redes de punteros del conurbano, ya sean las que respondían a

los intendentes del PJ o a las de los cooptados movimientos de desocupados (FTV- Mov. Evita y otros minoritarios). La “causa nacional” que esgrimía el gobierno, en realidad, no era percibida por las grandes masas trabajadoras como una causa propia. Como señalamos antes, la reconstrucción de la burguesía nacional pregonada por el kirchnerismo se había forjado sobre la precarización laboral y salarios que no alcanzaban a cubrir la canasta familiar. Hay que señalar además que gran parte de la compra de dólares que realizaba el gobierno para mantener devaluado el peso se sostenía con emisión monetaria del Banco Central, incentivando así el proceso inflacionario y la caída del poder adquisitivo de los sectores obreros. Por otro lado, el inmovilismo del gobierno ante el conjunto de contradicciones que abría la crisis se manifestó en su incapacidad para tomar una medida de carácter popular como la derogación de la ley del peón rural de la dictadura, que pudiese fracturar el frente político que encabezaba el gran capital agrario y movilizar tras de sí a los sectores más explotados del campo. Por el contrario, inclusive en el terreno de la movilización callejera, el gobierno se vio superado en número por los actos de la conservadora Sociedad Rural y la pequeña burguesía chacarera. Se ponía una vez más de manifiesto la completa impotencia del nacionalismo de contenido burgués para movilizar a las masas explotadas del campo y la ciudad y enfrentar de manera consecuente a los sectores derechistas, tradicionalmente ligados al capital financiero internacional. Pero principalmente se revelaba la completa nulidad del kirchnerismo como referencia popular.

La parálisis del gobierno ante el lock out de las patronales agrarias lo llevó a optar por una resolución parlamentaria del conflicto. Si bien a priori el gobierno, junto a sus aliados, lograba la mayoría en ambas cámaras, la opción parlamentaria era un claro retroceso ya que lo exponía al lobby de uno de los sectores capitalistas más poderosos del país. El desenlace final de esta disputa capitalista fue la derrota del gobierno, justamente por el tráfico de votos de un bando a otro y el decisivo voto de su aliado principal, el vicepresidente radical Cobos, a favor del capital agrario. Ahora, el gobierno recién asumido de CFK no solo debía enfrentar una derrota política inesperada, que condicionaba la futura gobernabilidad del régimen, sino también la urgente necesidad de financiamiento en el marco de una bancarrota capitalista internacional sin precedentes y una fuga de capitales que aplazaban indefinidamente las posibilidades de “normalización” de la economía y la vuelta a los mercados internacionales de crédito que la clase capitalista en su conjunto esperaba de la nueva administración.

Al choque con la burguesía agraria le siguieron numerosos cierres de empresas, el comienzo de suspensiones, y como era de esperar, una nueva alza de los conflictos laborales. La crisis internacional en curso no hacía más que acentuar las contradicciones de la experiencia “nacionalista” y mostraba los límites de la recomposición capitalista iniciada en 2003. Fue entonces, ante la imposibilidad política de aplicar un ajuste en regla sin que esto produjese un estallido social de mayor envergadura, que el gobierno de CFK decidió a finales de 2008 recuperar la iniciativa nacionalizando los fondos de las AFJP. La obtención de estos fondos garantizaba al gobierno, en lo inmediato, poder seguir cumpliendo con los pagos de la deuda pública. Si bien la medida fue criticada por los capitales afectados, la burguesía de conjunto la sostuvo al comprender que los recursos jubilatorios serían aplicados al rescate del capital en el marco de la crisis. En este sentido el destino de los fondos estatizados siguió siendo el mismo que con las AFJP: la compra de títulos públicos y de acciones de empresas privadas, a los que se sumaron los préstamos y subsidios al capital. El nuevo régimen previsional, en definitiva, no era más

que un sistema de capitalización bajo la égida del Estado, donde los haberes jubilatorios seguían sometidos al vaivén de los negocios capitalistas. La medida, si bien podría haber suscitado una simpatía entre las masas, no lo hizo, o en todo caso pasó desapercibida, dado que no tuvo como correlato un aumento en los haberes jubilatorios —el gobierno se opuso fervientemente a la reivindicación del 82% móvil— y en la calidad de vida de los trabajadores, a quienes por otro lado realmente pertenecían esos fondos. Sólo un año después, cuando el agravamiento de la polarización social y la inflación reinstaló en la agenda nacional la cuestión de la pobreza y el fantasma de una reacción popular, el gobierno empleó parte de los recursos jubilatorios para algunas medidas asistenciales como la Asignación Universal por Hijo, que otorgaba la raquítica suma de 180 pesos mensuales por hijo menor de 18 años a los trabajadores desocupados o en negro.

Sin embargo, dado el carácter aislado de esta nacionalización, el gobierno no logró evitar que la crisis siguiera su curso. Donde más impactó es en el poder adquisitivo y las condiciones laborales de la clase obrera. La creciente inflación, sumada a la imposición de topes y aumentos escalonados en las paritarias, dio lugar a un importante movimiento de huelgas y ocupaciones de fábricas. La organización sobre la base de reivindicaciones cada vez más apremiantes profundizó el desarrollo de activistas y cuerpos de delegados combativos que cuestionan la dirección a la anquilosada burocracia sindical aliada al gobierno. Con este cuestionamiento a la burocracia, el principal instrumento de contención y regimentación del movimiento obrero durante la última etapa, se manifestaba el agotamiento político del kirchnerismo también en el campo de las relaciones laborales.

El carácter generalizado de la crisis que enfrentaba el régimen iba a quedar en evidencia con el adelantamiento de las elecciones legislativas para junio de 2009. Con esta maniobra, el kirchnerismo calculaba poder mantener su mayoría parlamentaria antes que los efectos de la crisis tuvieran un mayor impacto en la población. Sin embargo, fue precisamente en esos meses cuando la crisis causó su mayor impacto en el país, provocando una caída de casi el 5% del PBI. La maniobra del adelantamiento electoral no iba a poder sortear los efectos disolventes de la crisis económica sobre la superestructura política. El kirchnerismo sufrió una dura derrota en las legislativas, con la particularidad de ser el propio Néstor Kirchner quien resultó derrotado en la categoría de diputados nacionales bonaerenses por el advenedizo candidato de centroderecha Francisco de Narváez. La derrota terminó de desatar una crisis con un sector del PJ bonaerense, que previendo el derrumbe de la camarilla gobernante había jugado a dos puntas, poniendo parte de su aparato de punteros al servicio de la candidatura de Unión-Pro. Un día después de la derrota y habiendo perdido el apoyo de un sector fundamental del peronismo Néstor Kirchner renunció a la presidencia del Partido Justicialista.

Derrumbe de régimen y bonapartismo

La debacle del gobierno en las legislativas de 2009 reflejaba el completo impasse al que había llegado el régimen político inaugurado en 2002, como consecuencia de la bancarrota capitalista y el agotamiento de su política económica. El desenlace electoral expresó un cambio de frente de la “burguesía nacional”, que había defendido el “modelo pro-

ductivo" —moneda y salarios devaluados— desde el gobierno de Duhalde en adelante. Las limitaciones financieras del "modelo" llevaron a la burguesía a optar políticamente por la variable capitalista opositora del ajuste fiscal y la liberación de las tarifas. Por otro lado, si bien hasta al momento la burguesía reconocía al kirchnerismo su capacidad de regimentar el conflicto social a través de la burocracia de los sindicatos, la crisis del "modelo" implicaba al mismo tiempo el derrumbe de ese arbitraje político que se construyó, después de 2003, entre los obreros y la burguesía. Ante la posibilidad de un desmadre de la lucha reivindicativa la burguesía parecía optar por profundizar la judicialización y la represión de la protesta social que planteaba la oposición de derecha.

Sin embargo, ir a un agudización de la lucha de clases no era del todo viable para la burguesía en el marco de un gobierno debilitado y una oposición patronal que si bien había propinado un duro golpe al kirchnerismo todavía se encontraba profundamente atomizada y sin poder estructurarse en torno a un liderazgo luego de la crisis que afectó a los partidos en 2001. Dividida en distintos sectores de centroderecha (UCR-Peronismo Federal- Coalición Cívica-PRO) y centroizquierda (PS-Proyecto Sur y otros bloques menores) oscilaba entre el apoyo y la oposición a las iniciativas del Poder Ejecutivo.

Este inmovilismo y neutralización recíproca de la oposición patronal, es decir, su imposibilidad para dirigir una salida a la crisis de régimen, permitieron recuperar terreno al gobierno aunque acentuando sus características bonapartistas. La inviabilidad del régimen constitucional y de la división de poderes obligaba al Ejecutivo a un mayor intervencionismo y a gobernar por medio de decretos de necesidad y urgencia. Al lograr una autonomía real a nivel de la superestructura política (Parlamento) el gobierno buscó presentarse como árbitro frente a los diferentes sectores y clases en pugna que componen su base social. Sin embargo, la autonomía del poder bonapartista con relación a la burguesía dominante es pura apariencia, ya que el contenido concreto de la política ejecutada por tal poder coincide con los intereses económicos sustanciales de la clase dominante.

Esto último fue finalmente comprendido por la burguesía en ocasión del decreto, enviado por la presidenta CFK en diciembre de 2009, que habilitó al Ejecutivo a pagar los vencimientos de la deuda externa utilizando las reservas del Banco Central, vulnerando así su autonomía. A pesar de la oposición del entonces titular de la entidad, Martín Redrado, y de los partidos de la oposición patronal, con el correr de los meses la burguesía apoyó el pago de la deuda con reservas, entendiendo que ello ofrecía garantías al capital financiero para la apertura de un nuevo ciclo de endeudamiento. Además de permitir la valorización de mercado de la deuda pública, el principal rubro de beneficio de los bancos en los últimos tiempos.

La tentativa bonapartista por un lado conciliaba con el imperialismo cumpliendo con las obligaciones de deuda y por otro mantenía, aunque de manera precaria, el apoyo del movimiento obrero a través de la burocracia sindical. Sirvió al gobierno para exhibir ante la burguesía un principio de autoridad para remontar la crisis. Esta situación, sin embargo, solamente se tornó viable a partir, nuevamente, de un hecho externo: la reversión transitoria del ciclo de la crisis internacional que produjo un reingreso de capitales especulativos a las llamadas economías emergentes. La gigantesca emisión de dinero de la Reserva Federal norteamericana para rescatar a la banca se transformó en un fenomenal negocio especulativo conocido como *carry trade*. Éste tiene lugar cuando los bancos

obtienen dinero a tasas bajas en determinadas plazas financieras —la Reserva Federal prestó a tasa casi cero a los bancos de Wall Street— para prestar o invertir a tasas o rendimientos muy superiores en otras, como es el caso de Argentina. El *carry trade* es siempre una operación de corto plazo, para prevenir cualquier reversión de la situación, con lo cual la situación económica del régimen, a pesar del ingreso de capitales, siguió siendo profundamente inestable. Los que más se vieron beneficiados con esta situación fueron, obviamente, los bancos que, como venía siendo una constante en los últimos tiempos, cerraron 2010 liderando el ranking de sectores económicos con mayores ganancias.²

La transitoria recomposición política del kirchnerismo luego de la derrota de 2009 contribuyó decisivamente al socavamiento de la oposición de derecha. Al avanzar en la normalización con el capital financiero el gobierno terminó haciendo propios los planteos de la oposición y, por esa vía, introdujo una cuña en ella. Parte del Peronismo Federal, que se constituyó a partir de la crisis del campo, regresó a las filas del gobierno (De la Sota en Córdoba, Reutemann en Santa Fe, Saadi y Barrionuevo en Catamarca), lo que le permitió a éste recuperar fuerza en el parlamento. Por otro lado, el recurso de la Ley de Medios, presentada por el gobierno como una lucha contra las corporaciones (Clarín), sirvió para contener el apoyo político de la pequeña burguesía ilustrada que se había sumado a las filas del gobierno durante el conflicto con el campo. Una verdadera imposura si tenemos en cuenta que durante este período una fracción nada despreciable de las corporaciones capitalistas internacionales, entre ellas mineras, petroleras y telefónicas, se había entrelazado fuertemente con la camarilla oficial a través de múltiples negocios y concesiones.

El carácter reaccionario de esta recomposición se manifestó en un reforzamiento de la presión del capital y el Estado sobre la clase obrera, a través del aumento de los ritmos y las horas extras, y la inflación imparable como vía indirecta para la reducción de los salarios. Como correlato, el gobierno libró durante esta etapa un combate a muerte para mantener y reforzar la regimentación de los sindicatos, a través de una burocracia integrada al Estado e incluso empresarial, e impedir así la independencia sindical y política de los trabajadores. Todas estas contradicciones sobre las que la tentativa bonapartista del gobierno buscaba abrirse paso para sostener al régimen quedaron brutalmente de manifiesto con el asesinato de Mariano Ferreya y la crisis política que inmediatamente se desató.

Como un replay de lo sucedido hacía ocho años en el Puente Pueyrredón, la reacción popular no se hizo esperar. Al día siguiente del asesinato una movilización multitudinaria llenó la Plaza de Mayo para pedir justicia y repudiar a la burocracia sindical. Inclusive fueron parte de la movilización sectores que simpatizaban con el gobierno, pero que ahora veían que una política en tal sentido era incompatible con la burocracia sindical que amparaba el kirchnerismo. El acto criminal desnudó a su vez todo el entramado de la precarización y superexplotación laboral en que se había basado la recuperación económica. La lucha de los tercerizados del ferrocarril que apoyaba Ferreya rápidamente se reveló como justa, ya que el propio gobierno tuvo que admitir el reclamo y pasar a planta permanente al conjunto de los trabajadores que pedían estar encuadrados en el convenio que les correspondía por su actividad. Esta situación implicó un punto de inflexión política y en consecuencia un duro golpe a la tentativa bonapartista y su capacidad de regimentar a un movimiento obrero cada vez más desafiante y que comenzaba a desbordar a las direcciones burocráticas.

Una semana después de la crisis desatada por el crimen del militante del Partido Obrero fallecía Néstor Kirchner por muerte natural. Algunos allegados al expresidente dejaron entrever que la descompensación que lo llevó al deceso estaba directamente relacionada con el profundo stress que le había ocasionado la muerte del joven militante. No suena descabellado, teniendo en cuenta que nadie como él sabía mejor que un hecho de esta magnitud podía terminar con la caída de un gobierno. El impacto que el asesinato de Mariano Ferreyra tuvo en la opinión pública indudablemente trajo a la cabeza del expresidente los fantasmas del Puente Pueyrredón, que retornaban ahora amenazando seriamente las posibilidades de continuidad y perpetuación reeleccionista de su propio gobierno.

Esta incapacidad para contener la protesta social bajo los métodos del bonapartismo iba a profundizarse en los meses siguientes. Una serie de ocupaciones de tierras por parte de pobladores de villas de emergencia (Parque Indoamericano) y pueblos originarios (Qom) terminaron con brutales represiones y el asesinato de manifestantes, esta vez por parte de las fuerzas de seguridad (nacionales y provinciales). Asimismo, esta situación puso de manifiesto el fracaso de la política habitacional del gobierno para con los sectores más necesitados luego de ocho años de vanagloriarse del crecimiento récord de la economía. A estas represiones prosiguieron encarcelamientos (delegados del Roca y del Sarmiento, entre otros), causas judiciales, y hasta el espionaje a reconocidos luchadores sociales y sindicales de la izquierda (Proyecto X). Con la creciente criminalización de la protesta social, el gobierno no sólo desempolvaba el programa de la derecha que la burguesía le demandaba, sino que terminaba por reconocer el fracaso de la llamada “política de derechos humanos”, poniendo así un punto final al relato mítico que había generado en torno a ella. De ahora en más se hablaría de la “doctrina de seguridad democrática” (Nilda Garré), la cual tendrá su máxima expresión hacia finales de 2011 con el voto del gobierno en favor de la llamada Ley Antiterrorista que reclamaba el imperialismo.

El conjunto de contradicciones irresueltas, sobre las que el gobierno pretendía arbitrar, se agudizó con los desequilibrios que provocaba la crisis global. Esto obligaba, para sostener al régimen, a desandar el camino político que el mismo gobierno decía haberse trazado. La reciente “recuperación” llevaba ahora a una crisis de la balanza comercial y de pagos, como resultado principalmente del crecimiento de las importaciones y de la persistencia de la fuga de capitales. A su vez el superávit fiscal comenzaba a extinguirse como producto del incremento de los subsidios que sostenían al sistema de privatizadas de los años noventa y el pago de capital e intereses de la deuda externa. A esto había que sumarle la necesidad de importación de petróleo, que expresaba una agudización de la crisis energética heredada por el vaciamiento de YPF iniciado en administraciones anteriores pero que los Kirchner continuaron.

Frente a esta situación el gobierno de CFK se aprestaba a lograr una reelección en las elecciones presidenciales de 2011. El desafío político era poder sostener su contradictoria y golpeada base de sustentación, desde la burocracia sindical acosada judicialmente que buscaba salvarse a sí misma, pasando por los organismos de derechos humanos, golpeados por recientes hechos represivos y el escándalo Schoklender, hasta los intendentes del PJ que siempre hacían su propio juego. Una de las salidas que ensayó el gobierno es el impulso de una fuerza política propia basada en la agrupación juvenil La Cándida. Sin embargo, una organización reciente, articulada desde el poder, que no tenía ningún tipo de inserción entre las masas, ni siquiera en la juventud, no era capaz de sustituir a

las fuerzas que hasta ahora habían sostenido al gobierno. Fue entonces que éste se vio empujado a habilitar las listas colectoras o “listas de adhesión”, que permitían sumar a candidatos de las más diversas extracciones políticas e ideológicas detrás de la candidatura presidencial de Cristina Kirchner. Esto incluso iba en contra de la propia reforma política oficial, que pretendía concentrar la oferta de candidaturas o listas electorales. El derrumbe del régimen se expresaba, nuevamente, en la situación explosiva de la economía y en una creciente disgregación del partido de gobierno y una aún peor de la oposición patronal. El gobierno buscó solapar esta situación en la campaña, al mejor estilo noventista, haciendo eje en el crecimiento del consumo que se había desarrollado a través del crédito. Es decir, un mayor consumo que no era la consecuencia de un mayor poder adquisitivo sino de una expansión del crédito, lo cual alimentaba la inflación y el desfasaje del peso respecto del dólar, encareciendo las mercaderías nacionales respecto de las extranjeras.

Las elecciones de octubre dieron la reelección a CFK con el 54% de los votos y una diferencia de 38 puntos sobre Hermes Binner (16%), el candidato del FAP, una variante del centroizquierda que si bien no había ingresado al gobierno en numerosas ocasiones había acompañado sus iniciativas políticas. Hermes Binner era uno de los gobernadores que más se había beneficiado con el “modelo” y el boom de la soja. Las restantes candidaturas de la oposición patronal no superaron el 12% de los votos. Esta crisis política de la oposición, a partir de las derrotas que el gobierno le había propinado luego del conflicto con campo, facilitó las cosas para que el kirchnerismo, a pesar de su propia crisis, se presentase frente al conjunto de las clases como la alternativa menos impredecible y por lo tanto capaz de garantizar cierta estabilidad frente a las turbulencias económicas y sociales que la crisis capitalista mundial estaba generando en todos los países. Sin embargo, esto último fue también, contradictoriamente, el terreno fértil para que comience a estructurarse una oposición política al gobierno desde la izquierda revolucionaria. La contracara de la apabullante victoria del kirchnerismo sobre “la derecha”, fue, justamente, la importante votación lograda por las fuerzas de izquierda nucleadas en el FIT (cuyo primer episodio había sido sortear las proscriptivas elecciones primarias), permitiendo a la izquierda revolucionaria instalarse como una alternativa política y una referencia popular frente a la crisis de régimen.

Luego del 54% los fuegos de artificio y los exabruptos verbales que vaticinaba un kirchnerismo eterno duraron poco. En los meses siguientes las contradicciones en curso, que el prolongado proceso electoral solo había logrado ralentizar, comenzarían a estallar una tras otra.

Estertores del final

La tentativa “nacionalista” de recomponer el cuadro capitalista luego del derrumbe de 2001 comenzaba a agonizar y se disgregaba en el devenir de sus propias contradicciones. El relato que auguraba la “profundización del modelo para avanzar en lo que falta” rápidamente dio lugar al lenguaje metafórico de “la sintonía fina”, lo cual, a pesar de las sutilezas, no significaba otra cosa que un enorme ajuste. El déficit fiscal, el agotamiento de las cajas de la Anses y de las reservas del Banco Central, y la imparable fuga de capitales, iban hacer estallar la política de subsidios a las privatizadas que hasta ahora había

sostenido el gobierno. El gasto de 80 mil millones de pesos que representaban los subsidios obligó al gobierno recientemente reelecto a plantear una quita, que sería compensada con aquello que los pulpos energéticos y del transporte venían reclamando hacía rato: un “sinceramiento” de los precios, o sea, un aumento de tarifas e inminentes impuestazos que pagaría la población. Un clásico: al fracaso de la regulación estatal proseguía el “dejar hacer” de las leyes del mercado.

Por otra parte, la remanida idea de la presencia del Estado durante el período kirchnerista no era otra cosa que el rescate, a través de los subsidios, del régimen de privatizaciones heredado del menemismo. Un régimen totalmente fraudulento que durante diez años sirvió para que los capitalistas se dedicaran a lucrar y a realizar nuevos negocios con los subsidios millonarios, a la vez que desinvertían y vaciaban las empresas en cuestión. La quiebra de todo este sistema y el fracaso de la “presencia del Estado” quedaron al desnudo otra vez de la peor manera: el choque ferroviario de la estación Once, el 22 de febrero de 2012, que dejó un saldo de 51 muertos. Una verdadera masacre, teniendo en cuenta las responsabilidades que cabían tanto al gobierno como a los empresarios en el mantenimiento de los ferrocarriles.

El hundimiento final del kirchnerismo no solo se expresa en la necesidad de desarmar las bases del “modelo” que decía representar sino, también, en la imposibilidad de realizar este viraje capitalista sin desatar crisis aún mayores. En el plano político se han multiplicado los choques con su propia base de sustentación: las dos más importantes son las que protagoniza con el gobernador bonaerense Daniel Scioli y el aparato del PJ, y con la burocracia sindical ligada a Hugo Moyano. La exacerbación de la crisis y la posibilidad concreta de un colapso del gobierno reclama un reforzamiento del poder bonapartista, lo cual, a su vez, agudiza la lucha de intereses contradictorios entre las diversas camarillas que sostienen al gobierno. El enfrentamiento con Moyano expresa que al gobierno se le ha acabado el margen de maniobra para sostener una burocracia sindical que reclama, para sostenerse a sí misma, un mínimo de independencia. Ahora, la necesidad capitalista de imponer el ajuste con topes por debajo de la inflación a las recientes paritarias, lleva al gobierno a buscar apoyo, a cambio de promoverlos a la dirección de la CGT, en los dirigentes burocráticos más desprestigiados, denunciados por su complicidad en las privatizaciones de los años noventa (los “Gordos”) e inclusive por haber sido colaboradores activos en la represión de la última dictadura militar (Gerardo Martínez de la Uocra) o incluso presos, como José Pedraza.

En el cuadro de esta situación terminal, donde todo lo que aparentaba solidez comienza a resquebrajarse, el gobierno intentará zafar nuevamente apelando a recursos extraordinarios, políticos y financieros. La inviabilidad del “modelo”, ahora reconocida por la misma presidenta, explica la reciente expropiación del 51% de las acciones de Repsol YPF. Una medida de emergencia ante la imposibilidad económica de seguir importando combustible y, por otro lado, la obtención de una nueva caja mientras las otras se van agotando. El relato oficial intenta presentar esta medida como un acto de soberanía nacional, pero, principalmente, como un signo vital del “modelo” a pesar de su irreversible ruina. Se da de cabeza, de todas formas, con el discurso de la misma presidenta, quien insistió en que no se trataba de una estatización sino de una medida que mantenía el carácter de sociedad anónima de la empresa. La salida capitalista pergeñada por el gobierno para YPF consiste en el ingreso de capitales imperialistas de otro color a cambio de un aumento tarifario de los combustibles: es lo que acordó CFK con

Barack Obama en Cartagena, un día antes de la intervención. Y por lo cual Hillary Clinton señaló, cuando le preguntaron qué opinaba sobre la expropiación, que “esperaba que Argentina tenga un mercado energético abierto”. Es decir, abierto a los capitales estadounidenses en perjuicio de su competidor español, quien durante el último período, producto de la crisis que azota a Europa, se dedicó a remitir el 90% de las utilidades a su casa matriz. Hay que señalar que al mismo tiempo que desinvertía Repsol le imponía al país la importación de gas a precios internacionales y en su propio beneficio. Todo esto, claro, con el aval del gobierno nacional que, paradójicamente, habla ahora de “soberanía energética”.

Como se ve, en este cuadro general la expropiación parcial de YPF no significa ningún paso adelante en la recuperación de los recursos nacionales: simplemente se trata de una operación de rescate que el Estado hace de sí mismo, a la vez que se preparan las condiciones para un nuevo saqueo del petróleo por parte de los monopolios extranjeros. ¿Cuál es el sentido sino las febriles reuniones del gobierno de CFK con Exxon, Total, Chevron y Petrobras?

No se trata ya, entonces, de contraponer un “modelo productivo” a uno “neoliberal”: lo que este derrumbe demuestra es que ha fracasado una vez más la tentativa de la burguesía nacional de dirigir un proceso de desarrollo autónomo. Los ecos del relato kirchnerista no alcanzan ya para detener la descomposición de toda la organización social que intentó mantener en pie. Este es un proceso irreversible que, a diferencia de 2001, se desenvuelve en el contexto de una crisis capitalista mundial imparable, que ha desarrollado un conjunto de crisis políticas tanto en Europa como en los países árabes y puesto fin a gobiernos del más diverso signo político. Al “proyecto” de los Kirchner no le espera un futuro promisorio: por el contrario, los estertores del final ya han comenzado.

Notas

1 Un hecho que confirma su hostilidad a los sectores movilizados fue la organización de patotas afines a la gobernación santacruceña para reprimir en 2002 los cacerolazos en Río Gallegos. En el grupo represor había varios funcionarios del gobierno provincial de Néstor Kirchner, como el gerente de Servicios Públicos, José Luis Gómez, y Rudy Ulloa, el ex chofer de Kirchner, luego devenido en poderoso empresario.

2 Este cuadro económico terminaba de correr el velo sobre una de las principales estafas ideológicas del kirchnerismo: la del “modelo productivo”. Luego de siete años de crecimiento, la mentada industria nacional se reducía, en lo esencial, a un sistema de armado de componentes producidos en el exterior.